

Tratamiento de datos de facturación telefónica - Año 2000

Se planteó por el titular de un Organo similar al Defensor del Pueblo en una determinada Comunidad Autónoma la licitud del escrito remitido por un operador de telecomunicaciones a sus abonados en que se advertía del tratamiento de los datos referentes a la facturación telefónica en caso de que no existiese oposición de los mismos en el plazo de un mes.

Dado que esta misma materia ha sido analizada en otro lugar de esta Memoria, debemos recordar simplemente que el artículo 65 del Reglamento de desarrollo del Título III de la Ley general de Telecomunicaciones prevé que estos datos sólo podrán ser tratados "con objeto de realizar la facturación y los pagos de las interconexiones", así como "para la promoción comercial de sus propios servicios de telecomunicaciones, siempre y cuando el abonado haya dado su consentimiento previo", añadiendo el artículo 69 que "los operadores deberán dirigirse a los abonados, al menos, con un mes de antelación al inicio de la promoción, requiriendo su consentimiento que, de producirse, será válido hasta que los abonados lo dejen sin efecto de modo expreso. Si en el plazo de un mes desde que el abonado reciba la solicitud, éste no se hubiese pronunciado al respecto, se entenderá que consiente".

Por ello, a nuestro parecer, la cláusula cumple con lo dispuesto en las normas anteriormente citadas, dado que pone de manifiesto la existencia de un tratamiento, cuyo responsable será la propia operadora, limitando sus finalidades a las dos que se indican en el artículo 65 del Real Decreto. En este sentido se prevé el tratamiento de los datos para la ejecución del contrato, en el párrafo primero, y para la realización de actividades de promoción comercial, en el párrafo segundo, concediéndose a los afectados la posibilidad de que los datos sean cedidos para esta última finalidad a terceras empresas en el párrafo tercero, en el que además se otorga un periodo de tiempo prudencial (un mes) para ejercer el derecho de oposición, en los términos que prevé la normativa vigente. Además la cláusula pone de manifiesto la posibilidad de revocar en cualquier momento el consentimiento. Del mismo modo se indican cuales serán los datos objeto de tratamiento y ante quien podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación y cancelación, indicándose a tal efecto una dirección concreta.

No obstante, la consulta planteó que el cauce escogido por la propia operadora para poner esta circunstancia en conocimiento de sus abonados (su remisión junto con la factura telefónica) resultaba inadecuada, señalándose por esta Agencia que :

- En primer lugar, ni la Ley Orgánica 15/1999, ni el Real Decreto 1736/1998 vienen a establecer un procedimiento a través del cual debe recabarse el consentimiento, limitándose el Reglamento a establecer los requisitos que ya se han indicado, a diferencia de lo que señala en otros lugares (por ejemplo, en relación con la utilización del dispositivo de visualización de la línea llamante y su posible ocultación). Por ello, y sin perjuicio de que el procedimiento pueda no considerarse el más idóneo desde el punto de vista de la protección de los

derechos de los ciudadanos, lo cierto es que no puede apreciarse vulneración alguna de los citados derechos, toda vez que se han adoptado las medidas que la Ley exige.

- En segundo término, y en lo que se refiere al modo en que se ha producido la notificación, la Ley no exige que la misma se haga en escrito separado ni con referencia especial a su contenido. Por otra parte, se considera que la remisión de la comunicación conjuntamente con la factura telefónica viene precisamente a aclarar a qué datos está haciendo referencia la misma, lo que facilita al interesado el conocimiento de los extremos respecto de los cuales está prestando el consentimiento con mayor claridad que si la comunicación se efectuara de forma separada. Ello se basa en que la factura telefónica desglosada contiene tanto los datos esenciales del contrato como todos aquellos a que se refiere el artículo 69 del Real Decreto 1736/1998. Además, el hecho de que la remisión se efectúe conjuntamente con la factura asegura que el interesado tendrá una mayor probabilidad de conocer su contenido, al quedar sumamente claro que el envío no es meramente publicitario o de otra naturaleza.

- Por último, si bien podrían existir otros medios por los que el interesado pudiera ejercitar su derecho de oposición al tratamiento o, posteriormente, su derecho de cancelación, lo cierto es que no existe, como se ha venido indicando, previsión alguna que imponga a la compañía de telecomunicaciones la obligación de optar por uno u otro medio. Además el medio contenido en la comunicación tiene una importante ventaja respecto de otros, dado que asegura, en beneficio de ambas partes, la existencia de un documento que, en su caso, tendrá el valor probatorio suficiente para acreditar su remisión por parte del propio afectado o de la compañía.

En consecuencia, se indicó que el procedimiento empleado por la operadora resulta plenamente conforme con la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal.